

Paulson instó al Congreso a «alzarse por encima de las diferencias bipartidistas» y transferir las cotizaciones de la Seguridad Social a los bancos de inversión de Wall Street. En una argumentación aún más extravagante, Paulson justificó sus recortes fiscales a favor de los ricos y el aumento de los pagos de pobres y retirados como un «problema demográfico». «La demografía no miente, ni es partidista. Si no abordamos el problema, estos programas obstaculizarán seriamente nuestra flexibilidad económica y socavarán nuestra competitividad» (Cf. FT, 2.8.2006). El problema no es demográfico ni de envejecimiento, sino que reside en los recortes a gran escala y largo plazo de los impuestos, que han reducido los ingresos estatales, y también en la utilización gubernamental de las contribuciones a la Seguridad Social con el fin de financiar los actuales déficits provocados por la reducción de los impuestos sobre la herencia, los ingresos altos, los beneficios del capital y otros impuestos progresivos. El discurso de Paulson en la Universidad de Columbia, en Nueva York, a comienzos de agosto coloca la privatización de la Seguridad Social de nuevo «firmemente en la agenda», y asegura que cuenta con todo el apoyo de Bush. Es evidente que Paulson ha «sacrificado» su salario multimillonario en Goldman Sachs y ha puesto «en fideicomiso» sus fortunas de varios cientos de millones de dólares en bonos y opciones sobre acciones no por obligación cívica sino para transferir miles de

millones de dólares de las contribuciones de la Seguridad Social para que sean «gestionados», con unos lucrativos honorarios, por sus socios y colegas de Goldman Sachs, Citibank, JP Morgan y el resto de la pandilla.

Su decisión de «reformar» las asignaciones sociales de los pobres y los ancianos, con el fin de proporcionar flexibilidad y competitividad al big business significa básicamente una reducción de los desembolsos gubernamentales en beneficio de las clases media, trabajadora y baja, a fin de poder reducir aún más los impuestos del mundo de las grandes corporaciones e incrementar las subvenciones a los inversores y grandes operadores en el exterior. En este contexto, «flexibilidad» significa, potencialmente, un espacio más amplio para reducir los impuestos corporativos, o para transferir fondos de las asignaciones sociales a los pagos a favor de los poseedores de bonos. Probablemente, significa también aumentar las exigencias de la edad de jubilación y aumentar los costes del servicio médico.

Las limitaciones presupuestarias no tienen nada que ver con la demografía y sí mucho con la política fiscal. La «flexibilidad económica» puede conseguirse si las grandes empresas aceptan unas tasas menores de beneficio, si se hace hincapié en la inversión pública cuando la infraestructuras están deterioradas, si se reducen drásticamente unos gastos militares exorbitantes, y, sobre todo, si se hace cumplir la política